

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAV PARA 2022

Euskal Herria, 23 de noviembre de 2021

**BURUJABETZA
BIZITZA DUINERAKO**

Vamos hacia el cambio



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAV PARA 2022

El proyecto de presupuestos del gobierno de Lakua asciende a un total de 13.107,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,3% y 665,4 millones más respecto al año anterior.

No obstante, para valorar en términos reales el aumento presupuestario también es necesario tener en cuenta el actual proceso inflacionista y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del dinero. El gobierno no comunica previsiones oficiales sobre la evolución de los precios al consumo, pero es probable que este año la inflación se acerque al 3% en media anual.

Como es habitual el gobierno de Lakua ha vuelto a publicitar su proyecto presupuestario como el "mayor de la historia", algo que en principio no merece consideración especial en un contexto de mayor dinamismo económico. De hecho, en la actual fase de recuperación se prevé un crecimiento del PIB nominal del 8,5% en 2021 y del 7,9% en 2022.

En realidad, a la vista de como evolucionarán el presupuesto y el PIB, el presupuesto de gastos del gobierno autonómico perderá peso sobre el conjunto de la economía.

El principal componente de ingresos del presupuesto autonómico son las aportaciones de las Diputaciones Forales, y se prevé que el próximo año aumentarán un 14,4%. Pero este incremento no tiene su origen en la modificación de la normativa fiscal, sino que viene impulsado fundamentalmente por la recuperación económica.

El gobierno autonómico se obstina en excluir la fiscalidad de las negociaciones presupuestarias, porque considera que "no es el momento" y además no forma parte de sus competencias, sino de las diputaciones. Mientras tanto los gobiernos forales, sustentados por la misma coalición de partidos, mira para otro lado.

Respecto a la orientación presupuestaria Lakua la califica de expansionista, y la contrapone con la posición mantenida en presupuestos anteriores. Quienes ayer eran firmes defensores de las medidas de recorte del gasto público, hoy pretenden aparecer ante la sociedad como partidarios de revertir aquellas políticas de austeridad.

Asimismo, el ejecutivo subraya la necesidad de dirigir los esfuerzos presupuestarios de 2022 hacia la puesta en marcha de un plan de inversiones que actúe como palanca para impulsar la recuperación y hacer frente a las tres grandes transiciones que constituyen el gran reto de las próximas décadas: la tecnológica-digital, la energético-climática, y la social y sanitaria.

Para su financiación el gobierno considera oportuno aprovechar la relajación de las reglas fiscales, dado que la Comisión Europea mantendrá en suspenso la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria por tercer año consecutivo.

En este contexto, la política de endeudamiento se ajustará al acuerdo alcanzado con el gobierno central, donde pactó un límite de déficit equivalente al 0,9% del PIB.

El otro mecanismo de apoyo serán los fondos europeos, aunque todavía no se conoce la cantidad concreta que se va a recibir por esta vía.

Desde la perspectiva de los capítulos de gasto, la mayor parte del incremento presupuestario total (en concreto más del 80%) es absorbido por los gastos en inversión pública. De manera que el próximo año la inversión se dispara un 50% hasta superar los 1.605 millones, alrededor de 535,4 millones más que el año anterior.

Sin embargo, sólo el 29% de la denominada "inversión pública" va dirigida a financiar la producción o adquisición de nuevos equipamientos e infraestructuras propias, de titularidad pública y recogidas bajo la denominación Inversiones Reales.

El 62% del esfuerzo inversor es absorbido por Transferencias y Subvenciones de Capital, que en realidad son ayudas y subsidios públicos concedidos para financiar inversiones de empresas privadas, sin ninguna contrapartida a cambio.

Otros 144,7 millones de euros (el 9% restante) son para Activos Financieros: recursos utilizados para conceder créditos y avales a empresas, o para adquirir participaciones en su capital social, ya sea directamente o a través del Instituto Vasco de Finanzas.

(en miles de euros)	2022	2021	Dif.	Var.
Inversión Pública	1.605.395,4	1.069.976,1	535.419,3	50,0%
Inversiones Reales	469.952,4	247.677,7	222.274,7	89,7%
Transferencias y Subvenciones de Capital	990.706,7	770.281,3	220.425,4	28,6%
Aumento de Activos Financieros	144.736,3	52.017,1	92.719,2	178,2%

El capítulo correspondiente a gastos del personal prevé un aumento de 103,9 millones de euros, y recoge un incremento de las retribuciones salariales del 2%.

A este respecto, es conveniente recordar que el IPC en octubre alcanzó el 5% en tasa interanual, y la inflación media anual en 2021 no será inferior al 3%.

Por otro lado, vamos a analizar las prioridades de la acción de gobierno y su reflejo presupuestario utilizando la clasificación funcional del gasto, lo que nos permite comprobar la evolución de los recursos destinados a las diferentes políticas.

Al igual que todos los años el gobierno ha destacado el carácter social de los presupuestos, llegando a afirmar que 8 de cada 10 euros se destinan a gasto social.

En primer lugar conviene precisar que los recursos dedicados en 2022 a políticas sociales en realidad suponen el 68% del presupuesto total. Este porcentaje está bastante alejado del 80% que la propaganda gubernamental ha pretendido publicitar.

Las políticas de gasto social incluye los grupos funcionales que en la tabla aparecen con los números 3 y 4. En estos grupos se encuadra los programas destinados a Seguridad y Protección Social, Promoción Social, Sanidad, Educación, Vivienda y Urbanismo, Bienestar Comunitario, Otros Servicios Comunitarios, Cultura, y Promoción del Euskera. En total suman 8.911,7 millones de euros.

GASTOS POR FUNCIÓN (en miles)	2022	2021	Dif.	Var.
1. Servicios de carácter general	1.122.892,9	1.020.374,6	102.518,3	10,0%
2. Protección civil y seguridad ciudadana	709.878,2	677.845,4	32.032,8	4,7%
3. Seguridad, protección y promoción social	1.107.485,1	1.114.178,7	-6.693,6	-0,6%
31. Seguridad y protección social	658.738,2	682.353,7	-23.615,5	-3,5%
32. Promoción social	448.746,9	431.825,0	16.921,9	3,9%
4. Producción de bienes públicos de carácter social	7.804.220,8	7.452.248,6	351.972,2	4,7%
41. Sanidad	4.161.412,0	3.994.412,0	167.000,0	4,2%
42. Educación	3.008.746,5	2.887.661,5	121.085,0	4,2%
43. Vivienda y urbanismo	193.449,2	173.434,2	20.015,0	11,5%
44. Bienestar comunitario	47.253,9	41.340,8	5.913,1	14,3%
45. Cultura	249.684,4	220.740,9	28.943,5	13,1%
46. Otros servicios comunitarios y sociales	18.291,0	14.906,8	3.384,2	22,7%
47. Promoción del euskera	125.383,9	119.752,4	5.631,5	4,7%
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	866.743,7	765.013,3	101.730,4	13,3%
6. Regulación económica de carácter general	103.668,0	43.199,1	60.468,9	140,0%
7. Regulación económica de sectores productivos	382.838,0	300.381,3	82.456,7	27,5%
9. Relaciones finan. con otras admn. públicas	80.584,6	85.909,9	-5.325,3	-6,2%
0. Deuda pública	929.488,6	983.214,0	-53.725,4	-5,5%
GASTO TOTAL	13.107.800,0	12.442.365,0	665.435,0	5,3%
GASTO SOCIAL	8.911.705,9	8.566.427,3	345.278,6	4,0%
Gasto Social / Gasto Total	68,0%	68,8%		

En segundo lugar, aparentemente ese 68% representa una proporción más elevada que en otros presupuestos autonómicos. Sin embargo, este pretendido predominio del gasto social se debe al peculiar modelo de reparto competencial entre las diferentes administraciones públicas presentes en la CAV.

En concreto, el Concierto Económico y el pago del Cupo son los instrumentos con los que contribuimos a financiar los gastos del Estado en competencias no asumidas por el gobierno autonómico. Y la cuantía del gasto dedicado a estas competencias representa más del 67% del presupuesto del Estado.

Pero son las Diputaciones Forales las encargadas de realizar estas "aportaciones" al Estado con los ingresos recaudados mediante los tributos concertados. Por esa razón estos gastos no figuran en las cuentas del Gobierno Vasco, y esto ayuda a simular una imagen de presupuestos sociales que no se ajusta a la realidad.

En tercer lugar, comparando el presupuesto aprobado para 2021 con el proyecto para 2022, se advierte una disminución del esfuerzo presupuestario destinado a gastos sociales, cuyo porcentaje sobre el gasto total pasaría del 68,8% al 68%.

Esta nueva caída del peso del gasto social en el presupuesto viene a profundizar una tendencia negativa que comenzó a raíz de la anterior crisis y la política de recortes presupuestarios.

Una retrospectiva sobre la caída del gasto social en términos reales.

En el año 2009 el gasto social realmente ejecutado (no el presupuesto inicial) suponía el 73,9% del presupuesto total. A partir de entonces el peso de las políticas sociales comenzó a caer como consecuencia de los recortes sociales.

Al mismo tiempo la carga financiera derivada del creciente endeudamiento fue aumentando y absorbiendo cada vez más recursos presupuestarios, lo que contribuyó también a agravar la situación.

Ni siquiera la transferencia de las políticas activas de empleo ha permitido maquillar contablemente la caída del gasto social.

El traspaso de estas políticas se hizo efectivo en 2011 y su coste fue valorado en 472 millones de euros, cuantía que aminoraba el cupo a pagar al Estado por competencias no asumidas. Esto suponía aumentar los recursos disponibles para las instituciones de la CAV e incrementar la aportación de las diputaciones al Gobierno Vasco, que a partir de entonces tendría que correr con la financiación de las nuevas competencias.

Por eso el peso de las políticas sociales aumentó en 2011 hasta el 74,1% del gasto total ejecutado, pero después volvió a disminuir como resultado de nuevos recortes.

Es cierto que tras la recuperación económica iniciada en 2014 las dotaciones presupuestarias destinadas a políticas sociales comenzaron a recuperarse, al menos en términos nominales. Es decir, sin tener en cuenta la depreciación del dinero provocada por los efectos de la inflación.

Ahora bien, es evidente que 100 euros de hoy no tienen el mismo valor en términos reales o de poder adquisitivo que hace diez o doce años.

Por tanto, las estadísticas de liquidación presupuestaria reflejan que desde el año 2014 el volumen de gasto dedicado a políticas sociales ha ido en aumento, en términos nominales. Sin embargo, una vez descontada la inflación¹, el valor real de esas dotaciones adicionales ha sido insuficiente para contrarrestar los recortes sufridos años atrás.

En concreto, y en caso de cumplirse las previsiones presupuestarias, en 2022 la inversión del gobierno en políticas sociales habrá caído en términos reales un 2,2% en comparación con el volumen presupuestario dedicado en 2009.

En otras palabras, el gobierno de Urkullu no ha mostrado sensibilidad ni voluntad política para aumentar el gasto social a un ritmo que permita dejar atrás las políticas de austeridad y reparar sus efectos. Algo que en el mejor de los casos nos devolvería a la "casilla de salida" trece años después.

Mientras tanto, como consecuencia de las graves crisis sufridas las necesidades sociales continúan aumentando, y con ello se agravan las deficiencias estructurales que históricamente arrastramos en materia de servicios públicos y protección social.

Euskal Herria, 23 de noviembre de 2021

¹ Para los años 2021 y 2022 hemos trabajado con unas previsiones de inflación del 2,9% y el 2,3% en media anual.